

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por ESTELLA LOPEZ DE CADAVID en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (Radicado 05001-31-05-002-2021-00334-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Adriana María Correa Carrascal, con tarjeta profesional No. 197.178 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

**ANTECEDENTES**

En lo esencial pretende la demandante que se declare la ineficacia o en su defecto la nulidad del traslado que realizó del RPM al RAIS por medio de la AFP PORVENIR S.A., para que consecuentemente se tenga a la actora como afiliada sin solución de continuidad al RPM. Acto seguido, se solicita el traslado de los dineros que obran en la cuenta de ahorro individual de la accionante, incluyendo así los rendimientos, cuotas de administración y demás valores, para que sean restituidos a Colpensiones. De igual forma, solicitó la condena en costas a las enjuiciadas.

Para el sustento de estas pretensiones, narró en lo esencial que nació el día 20 de marzo de 1959; que en un primer momento se encontraba afiliada al otrora ISS hoy Colpensiones; que posteriormente diligenció formulario de afiliación para trasladarse a la AFP PORVENIR S.A. en abril de 1994; para la anterior decisión hubo deficiente información, dado que la suministrada no fue clara, precisa y concreta, en tanto se omitieron datos concernientes a los beneficios, desventajas, implicaciones y requisitos que envolvían el amplio espectro de los regímenes pensionales; y finaliza agregando que reclamó a Colpensiones, pero le fue negado el traslado.

Colpensiones, en la contestación de la demanda, la cual hizo en término oportuno, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones, manifestando que no se evidencia ningún vicio que pudiera haber afectado el consentimiento otorgado por la actora. Sobre los hechos, aceptó la fecha en que nació la demandante, y sobre los demás manifestó que no son ciertos o que no le constan. Como excepciones de mérito, propuso las que denominó: carga dinámica de la prueba - particularidades del caso, imposibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, entre otras.

Por su parte, Porvenir S.A. también contestó la demanda de manera oportuna. Se opuso íntegramente a la concesión de las pretensiones incoadas exponiendo razones de hecho y de derecho. Sobre los hechos manifestó que no son ciertos o que no le constan. Como medios exceptivos de defensa, señaló: prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 20 de octubre de 2021, ordenó lo siguiente:

***PRIMERO: Se DECLARA la INEFICACIA del traslado de régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de ahorro***

*individual con Solidaridad efectuado ... efectuado por la señora ESTELLA LOPEZ DE CADAVID c.c. 24.807.433.*

**SEGUNDO:** *Se CONDENA a PORVENIR S.A. y a (...), para el caso de (...), y a PORVENIR S.A. para el caso de la señora ESTELLA LOPEZ DE CADAVID identificada C.C. 24.807.433 RDO 2021-00334; fondos a los que estuvieron y están afiliadas las demandantes, a realizar el trámite de traslado de las mismas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, trasladando a dicha entidad dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, todos los recursos de la cuenta de ahorro individual, incluyendo, también en el caso de (...), entidad a la cual ya no se encuentra afiliada la señora (...), las comisiones de administración, las cuotas de seguros previsionales y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que afectaron el valor de la cotización de las demandantes en vigencia de la afiliación a dichas AFP y durante todo el tiempo que estuvieron afiliadas a los mismos.*

**TERCERO:** *Se ORDENA a COLPENSIONES a reactivar la afiliación de la señora (...) y activar la afiliación de la señora ESTELLA LOPEZ DE CADAVID, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que administra, sin solución de continuidad y recibir todos los dineros que le sean trasladados por las administradoras demandadas, realizando la respectiva actualización de las historias laborales.*

**CUARTO:** *(...)*

**QUINTO:** *Se DECLARA no probada la excepción de prescripción por lo expuesto en las consideraciones. Las demás excepciones quedaron resueltas en los términos de este proveído.*

**SEXTO:** *Se CONDENA en costas a PORVENIR S.A. y a (...) en el proceso radicado (...) y a PORVENIR S.A. en el proceso 2021-00334, se fijan agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV en favor de cada una de las demandantes. Sin costas a cargo de COLPENSIONES. (...)*

**SÉPTIMO:** *De no ser apelada esta sentencia por parte de Colpensiones se enviará en el grado jurisdiccional del consulta.*

Inconforme con esta decisión presentó recurso de apelación la apoderada de la AFP PORVENIR S.A. Centró su inconformidad en dos vertientes independientes; en un primer momento, solicita la absolución de las condenas impuestas a su representada con fundamento en que efectivamente cumplió con el deber de información establecido para la época en que fue realizado el traslado, es decir, el que se encontraba vertido en el

artículo 97 del decreto 663 de 1993. Señala que, del interrogatorio brindado por la demandante, se concluyó que el móvil para solicitar la ineficacia del traslado, fue que los fondos privados no cumplieron con sus expectativas, aludiendo al monto de la prestación económica sin tener conocimiento específico de dichas condiciones o diferenciaciones entre uno y otro régimen. En el marco de estas consideraciones, solicita reconsiderar la postura del juez de instancia, en razón de que a pesar de indicarse que no se cumplió con el deber de información, este no se encontraba vigente como se aplica ahora, y que por lo tanto, debe estarse a los efectos de la aplicación de la ley en el tiempo. En suma, concluye que el traslado efectuado por la actora es válido y no pesa sobre él, ningún vicio que de pie a su invalidez.

Por otro lado, solicita que si llegase a prosperar la confirmación de la declaratoria de ineficacia, se revoquen las condenas en cuanto a la devolución de las comisiones de administración y seguros previsionales, ya que los mismos se utilizaron para la generación de rendimientos; que por demás se efectuó una adecuada gestión fiduciaria, y parte de estas deducciones se utilizan para cubrir el riesgo de invalidez y muerte, sumas que entre otras cosas ya fueron pagadas a un tercero de buena fe, y se estaría generando un desequilibrio de los contratos en caso de que se ordene a Porvenir S.A., el devolver con cargo a su propio patrimonio los emolumentos que fueron ejecutados para la buena gestión realizada.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## **CONSIDERACIONES**

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de reparo propuestos por la apoderada recurrente, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas u órdenes impuestas a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) que no hayan sido apeladas, serán estudiadas por la vía de la consulta (art. 69 del C.P. del T. y de la S.S.), de

conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y más recientemente por la sentencia de tutela SLT7382-2015 (Rad. 40200).

Fuera de toda discusión, por obrar plena prueba de ello, se tiene que la demandante nació el día 29 de marzo de 1959 (archivo 02 página 13), se afilió por primera vez al RAIS en septiembre del año 2003 (archivo 08 página 22), habiendo diligenciado formulario de afiliación en esta misma calenda (archivo 08 página 24). No obstante haber manifestado en la narrativa de su demanda que estuvo afiliada al ISS, de la documentación aportada en historia laboral (archivo 02 páginas 15-16), se advierte que se efectuó una cotización de manera errónea a este régimen por parte de su empleador en el año 2013, sin que significara esto que en algún momento hubiese estado vinculada a dicha entidad. Por otro lado, se vislumbra que realizó cotizaciones a entidades públicas, en el periodo que abarca desde el 1° de abril de 1994 al 1° de agosto de 2003 (archivo 08 página 27), para posteriormente realizar su vinculación formal en los términos que se señalaron previamente.

Partiendo entonces de lo que debe estudiarse por el recurso de apelación interpuesto y por el grado de la consulta en favor de Colpensiones, del contexto de los hechos y pretensiones de la demanda, y por supuesto de lo decidido, lo primero a esclarecer es si la afiliación de la demandante al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad de la actora al momento de afiliarse a PORVENIR S.A., estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica semejante.

Para estos fines, **y dado el poder vinculante de la jurisprudencia de las altas Cortes**, entre otras razones porque una de sus funciones esenciales es la de velar por la unidad e integridad del ordenamiento jurídico (art. 86 del CPTSS y 333 del CGP), criterio que ha destacado la Corte Constitucional en muchas de sus decisiones (véase entre otras la C 539 de 2011 y la SU 354 de

2017), la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2019 (SL1688-2019, Rad. 68838, ratificada, entre otras, en las sentencias SL1741-2021, SL1743-2021 y SL1942-2021), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, además de una adecuada sustentación, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una debida información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las reasesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros, **y que le dan respuesta razonable, de manera directa o indirecta a los distintos puntos que habrán de estudiarse en esta providencia, en especial al de determinar si las distintas decisiones del fallador de primer grado pueden o no avalarse.** Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

*“El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:*

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado

		acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa nº 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

*1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible*

*Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.*

*Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.*

*Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.*

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

***2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado***

*Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.*

*La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.*

*Sobre el particular, en la sentencia CSJ Sl. 19447-2017 la Sala explicó:*

*Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».*

*Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad,*



*encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario[...].*

*De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.*

*Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ Sl. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.*

*Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.*

En materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

*“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.*

*Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.*

Por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

*“Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.*

*Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones:*

*En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.*

*En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.*

*Por otro lado, no es de recibo el planteo de Protección S.A., cuando sostiene que una vez realizó la reasesoría, Myriam Arroyave Henao no mostró interés en la ineficacia de la vinculación al RAIS, al conservar su status de afiliada durante un tiempo. Se dice lo anterior ya que la sugerencia de Protección S.A. de regresar al RPMPD, se produjo el 26 de noviembre de 2003, y el formulario para la nueva afiliación al ISS se diligenció el 14 de enero de 2004 (f.º 97), es decir, la interesada no dejó transcurrir dos meses desde que recibió asesoría. Por lo demás, este lapso es razonable, pues dada la relevancia de esta determinación, era natural que la accionante se tomara un tiempo de reflexión, buscara información y consejo profesional para, finalmente, adoptar su elección.*

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por el *a quo* en este aspecto de la ineficacia, de ahí que habrá de confirmarse el punto, pues basta la mera ausencia de información a la

afiliada, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, o en este caso de afiliación de forma primigenia, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente asunto; a la Sala no le queda la menor duda que la demandada, en este caso, PORVENIR S.A., al no haber arrimado al proceso prueba idónea y completa de la información que se le debió de haber brindado a la señora LOPEZ DE CADAVID en la afiliación realizada en septiembre de 2003, y no inferirse esta del interrogatorio de parte que se le formuló, mucho menos de la manifestación de voluntad que reposa en el documento de vinculación, la consecuencia no puede ser otra diferente a la de declarar ineficaz tal acto y, por tanto, tener como querer de la actora el de estar vinculada al RPM.

Resultando claro lo anterior, es preciso recordar que en decisiones de esta naturaleza las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), esto es, tener como afiliación válida la inicial y, como consecuencia, que la entidad que actualmente maneja la cuenta de ahorro individual: PORVENIR S.A., debe trasladar a la administradora del RMPD (Colpensiones) todas las cotizaciones, incluyendo sus rendimientos, descuentos por cuotas de administración, seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y otros deducidos, pues solo de esta manera se entiende que el restablecimiento es completo.

En cuanto a los gastos de administración, sea del caso rememorar lo que sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, Rad. 56174 en la cual se dice lo siguiente:

*“Conforme a lo establecido en sede de casación, fuerza concluir entonces, que debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban, es decir, como si ello no hubiera ocurrido, lo cual trae como consecuencia, que la actora jamás perdió el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, y de igual forma, que el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como en oportunidades anteriores lo ha dispuesto la Sala, pudiéndose traer a colación las sentencias CSJ SL17595-2017 y*

*CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 ...”.*

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, esta misma Corporación en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*“Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal”* (negrilla fuera de texto).

En igual sentido puede verse la SL4803-2021 (Rad. 88879) del 20 de octubre de este año 2021, en la cual de manera expresa y directa se refirió a la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, cuotas de administración, comisiones y descuentos para los seguros de invalidez y sobrevivencia.

Las excepciones propuestas estuvo bien que no se declararan probadas: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de falta de causa para demandar, buena fe y compensación; y otras, como la de prescripción, incluyendo la que puede

involucrar las cuotas de administración, por estar comprometido en definitiva un derecho pensional. En la sentencia inicialmente citada, se anotó:

*“Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adocinado que «el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión».*

*Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo (CSJ SL8544-2016).*

Así las cosas, se ordenará la ineficacia de la afiliación realizada por la actora, ya que no obstante el no haber existido una afiliación inicial al ISS, se tiene por disposición en el último inciso del artículo 271 de la ley 100 de 1993 que cuando se haya verificado una afectación en cualquier forma, sea por su empleador o por cualquier persona natural o jurídica “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”, ahora bien, de consuno con las pretensiones deprecadas por la actora en libelo, se vislumbra que su decisión se encuentra encaminada a pertenecer al RPM sin solución de continuidad, razón por la cual se dispondrá conforme a esta aspiración.

Para la devolución de las sumas que se ordena devolver en esta providencia, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.4.8 del decreto 1833 de 2016.

Las costas de la instancia estarán a cargo de Porvenir S.A., dado que su recurso no prosperó (art. 365-1 CGP). Como agencias en derecho se fija la suma de 1 SMLMV, y a favor de la actora.

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta, por las razones de que da cuenta la parte motiva de esta providencia, con la precisión de que las restituciones a efectuar, deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016.

COSTAS a cargo de Porvenir S.A. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV, y a favor de la demandante.

Notifíquese por EDICTO

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310500220210033401  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** ESTELLA LOPEZ DE CADAVID  
**Demandado:** A.F.P. PORVENIR S.A.  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 26/08/2022  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario